

# El Programa de Convergencia y la Unión Económica y Monetaria: ¿Un plan de ajuste o reformas estructurales?

Joaquim Novella\*

Durante el primer semestre de 1992 el Gobierno español presentaba a las Cortes y a la CE el denominado "Plan de Convergencia" (PC), en el que se describían las políticas económicas que el Gobierno pretendía realizar con el fin de posibilitar que la economía española redujera progresivamente determinados desequilibrios macroeconómicos, para conseguir estar en condiciones de cumplir en 1996 los requisitos establecidos en el Tratado de Unión Europea, TUE, para poder integrarse en la fase final de la Unión Económica y Monetaria (UEM).

El objetivo prioritario del Plan parecía claro, cumplir las condiciones de convergencia establecidas en el TUE, sin embargo, la finalidad del Programa de Convergencia debería haber sido más ambiciosa, de manera que dicho documento supusiera la realización de un *programa completo y coherente* sobre las diversas políticas económicas, instrumentales y sectoriales a aplicar durante el próximo quinquenio.

El citado Plan General de Política Económica resultaba necesario si tenemos en cuenta que la economía española se ha visto inmersa en las últimas décadas en un fuerte proceso de cambio que le ha exigido, y le demandará en el futuro, una amplia capacidad de adaptación. En efecto, si en el pasado la economía española debió afrontar las dificultades

\*Catedrático de Política Económica,  
Universidad de Barcelona.

que se derivaron del fin del régimen anterior y de la crisis internacional de los setenta-ocho, más tarde nuestra economía se vio profundamente afectada por la importante apertura al exterior que tuvo lugar a partir de 1986, como cumplimiento de las cláusulas del Tratado de Adhesión a la CE. El proceso de integración se vio intensificado con la entrada de la peseta en el mecanismo de cambios del Sistema Monetario Europeo (SME) a mediados de 1989, vinculando de esta manera nuestro tipo de cambio y nuestras variables monetarias a la del resto de los países comunitarios.

Sin embargo, en el futuro aún restan etapas significativas para culminar el proceso de integración de la economía española en la CE. En primer lugar, el 1 de enero de 1993 España finalizó su período transitorio de adhesión a la CE y en esa misma fecha entró en vigor el Mercado Único Europeo que, como sabemos, implicará la supresión de las barreras que impiden la libre circulación de las mercancías, los servicios, los capitales y las personas. En segundo lugar, de acuerdo con el TUE, entre 1997 y 1999 se iniciará la tercera y última fase de la Unión Económica y Monetaria. En dicha etapa, los tipos de cambio entre las monedas serán fijados irrevocablemente como paso previo para su sustitución posterior por el ECU, se transferirá la soberanía en materia de política monetaria desde los diversos Estados al Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y finalmente las políticas económicas nacionales serán supervisadas especialmente en los ámbitos fiscales y presupuestarios.

Por otra parte, como hemos mencionado con anterioridad, en el TUE se establecen una serie de *condiciones de convergencia*, que deberán ser satisfechas por la economía española en el año 1996, si desea integrarse de forma definitiva en la etapa final de la UEM.

Por mi parte, en las páginas que siguen, intentaré evaluar la situación de la economía española y de sus equilibrios macroeconómicos, al mismo tiempo que analizaré las características y medidas propuestas en el Plan de Convergencia del Gobierno, estudiando sus limitaciones y las posibilidades de políticas económicas alternativas.

## LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 1985-1991.

Durante el sexenio 1985-90, la economía española tuvo un crecimiento realmente intenso, esta fase expansiva representaba de hecho la superación del largo período de crisis, 1975/84, que la había precedido. En efecto, entre 1975/84, la economía española padeció un fuerte proceso de crisis económica, de características más recesivas que las observadas en los países europeos: en este período, la actividad económica en términos del PIB creció únicamente el 1,65% de promedio anual, así mismo, en esta década se destruyeron 2.400.000 empleos, ascendiendo el número de parados en 1985 a 2.978.000, con una tasa de paro del 21,9%, la más elevada de la CE. Sectorialmente, podemos caracterizar esta

década como la de la pérdida de tejido industrial y de la construcción, ya que estas ramas vieron reducir su número de empleados en 936.000 y 490.000 respectivamente, al mismo tiempo su participación relativa en el PIB disminuyó desde el 29% de 1975 al 27,8% en 1985 para la industria, y del 9,1% al 6,5% para la construcción.

Sobre las causas de la "crisis diferencial española" los análisis no son coincidentes. Algunos estudiosos argumentan el fuerte encarecimiento de los costes empresariales (energéticos, laborales, financieros y fiscales), que en parte pudieron ser trasladados a los precios generando inflación, y en la medida en que no pudieron trasladarse provocaron caídas de los excedentes empresariales y de las tasas de beneficio; los resultados anteriores produjeron una fuerte reducción del proceso inversor, que experimentó tasas negativas del -2,5% anual promedio entre 1975 y 1984, generando consecuentemente un bajo crecimiento (1,65% anual) e importantes tasas de caída del empleo (-2% anual).

Sin negar la evidencia de los hechos anteriores, los orígenes de la "crisis diferencial española" pueden observarse con mayor claridad si tenemos en cuenta que nuestro país padeció, a partir de 1975, tres procesos de crisis simultáneos e interrelacionados: los efectos de la crisis económica internacional, las incertidumbres propias de la crisis del régimen franquista y, especialmente, la crisis del modelo de desarrollo implantado entre 1960 y 1975.

El "modelo de desarrollo español" se fundamentaba en una serie de características que se vieron cuestionadas en gran medida a principios de los setenta. En términos generales las características básicas del modelo 1960-75, fueron:

La existencia de unas amplias masas de mano de obra barata, con escasas posibilidades de organización y reivindicación dada la represión del régimen anterior, con buenas reservas de mano de obra en el campo y en la población femenina.

El impulso simultáneo de procesos de inversión de capital nacional y exterior, aportando este último tecnología adquirida en parte con divisas del turismo y la emigración.

La existencia de un mercado interno protegido frente al exterior.

Las posibilidades de obtener créditos a intereses reales nulos o negativos, frente a escasos pagos fiscales. La insuficiencia recaudatoria generó un sector público insuficiente y regresivo.

El impulso de crecimiento se realizó en base al tirón de la demanda interna, en los sectores industriales, de la construcción y los servicios, que no obstante no generaron suficiente empleo para absorber los excedentes de mano de obra del campo, constituyendo en ese contexto la emigración, la válvula de escape del mercado laboral.

En este marco se desarrollaron gran número de empresas poco capitalizadas y de dimensiones excesivamente reducidas; con escasos niveles de autofinanciación, con baja inversión tecnológica y con procesos organizativos no siempre eficaces, junto a una excesiva dependencia tecnológica y energética del exterior.

Desde finales de los sesenta la coyuntura internacional y nacional sufre progresivas variaciones que afectarán al modelo anterior provocándole una profunda crisis.

En el final de los sesenta y principios de los setenta, se produce una progresiva organización de los trabajadores, que impulsará mejoras salariales y laborales, al mismo tiempo se va produciendo cierta reducción de las reservas de mano de obra.

Las reivindicaciones sociales y políticas impulsadas en la transición a la democracia conllevarán la necesidad de desarrollar los servicios públicos junto a la realización de una reforma fiscal progresiva.

En el contexto de lucha contra la inflación, la financiación de los déficits públicos, con políticas monetarias restrictivas y estructuras oligopólicas en el sistema bancario, provocarán incrementos de los intereses reales y por consiguiente altos costes financieros a las empresas.

La crisis internacional provoca la vuelta de los emigrantes y con ello la pérdida de la válvula de escape del mercado laboral español.

Será también de gran importancia el crecimiento de los costes de energía.

Por último, nuestra economía, muy protegida frente al exterior, se va abriendo progresivamente, provocando dificultades a muchas empresas internas poco competitivas, ya que poseían dimensiones pequeñas y escasa capacidad de invasión tecnológica y comercial.

Los factores anteriores, unidos a la incertidumbre política de la transición, provocarán la crisis de un modelo de desarrollo basado en bajos costes y un mercado interior muy protegido, en el que se movían empresas no siempre bien preparadas para coyunturas *más exigentes*.

En esta fase de ciclo largo recesivo se estableció una estrategia de política económica aplicada tanto por los gobiernos de la extinta Unión de Centro Democrático (UCD), como por los gabinetes socialistas, centrada fundamentalmente en la moderación salarial, la flexibilización de los mercados laborales y la reducción de las plantillas, junto con políticas monetarias de carácter restrictivo. El objetivo final era conseguir reducir la inflación y al mismo tiempo posibilitar la recuperación de los excedentes y las tasas de beneficio empresarial, de manera que el crecimiento de la rentabilidad de las empresas impulsara la inversión y la producción, y a medio plazo el aumento del empleo.

Acompañando a las propuestas anteriores, se realizaron importantes medidas de reforma fiscal y de crecimiento del gasto público (como medio para hacer frente a los gastos generados por la crisis y posibilitar el crecimiento de los gastos sociales y servicios públicos que demandaba la democracia), se determinaron precios reales para la energía y se efectuaron medidas de reconversión en algunos sectores industriales, junto con ciertas reformas en los ámbitos de la empresa pública y de la Seguridad Social.

La política económica anterior permitió una recuperación de los excedentes y las tasas de beneficio de las empresas a partir de 1987. De manera que los excedentes empresariales en términos netos pasaron de representar el 33.1% de la renta nacional en 1977, al 35,9% en 1985, el aumento de los excedentes, en un primer momento, posibilitó reducir el grado de endeudamiento de las empresas y a partir de 1985 impulsó un fuerte crecimiento de la

actividad inversora que provocó importantes aumentos del nivel de empleo a partir de 1986. En términos de inflación, se reducirían también los desequilibrios, puesto que de un crecimiento del Índice de Precios al Consumo (IPC) superior al 21% en 1977 se pasó a un aumento del 8,2% en 1985.

Sin embargo, el proceso de ajuste a la crisis generó costes sociales muy elevados: un volumen amplio de parados junto a la pérdida del nivel adquisitivo de los trabajadores, y la reducción de nuestra capacidad industrial, en consecuencia disminuyó la participación de los asalariados en la renta nacional que del 55,2% en 1977 pasó a representar únicamente el 49,2% en 1985.

Por otra parte, la flexibilización del mercado de trabajo impulsó la segmentación del mismo, contribuyendo a incrementar las diferenciaciones económicas y sociales entre los trabajadores y a generar la aparición de cierta marginalidad laboral por parte de determinados colectivos.

No obstante, y aún a pesar de los muchos cambios realizados, la economía española *no abordó en profundidad* durante esta década *toda la serie de reformas estructurales* que los cambios en el entorno internacional y nacional demandaban. Me estoy refiriendo en primer lugar a la reindustrialización, es decir, a la realización de una política industrial que permitiera recuperar el tejido industrial perdido (potenciando nuevos sectores e impulsando el cambio en los métodos de gestión, producción, innovación y comercialización). En segundo término, hacía falta una reforma del turismo (que mejorara la calidad y diversificara la oferta turística para adaptarla a los cambios que exigía la demanda). En tercer término, la reforma del sistema financiero (fomentando el desarrollo de los mercados de capitales, la competitividad bancaria y de los seguros, de manera que se redujeran los excesivamente altos tipos de interés), la reforma de las administraciones públicas (para dotarlas de mayor eficacia y evitar duplicidades de funciones e insuficiencias económicas), la reforma de los servicios públicos (de transporte, telecomunicaciones, sanidad, etc.), cambios en la formación profesional y en el reciclaje de los trabajadores, (para adaptar las cualificaciones de oferta de mano de obra a las nuevas características de la demanda), proyectos de mejora de las condiciones laborales y de participación de los trabajadores en las empresas. En especial eran necesarios programas de mejora en diversos ámbitos de la gestión empresarial que permitieran elevar el nivel de competitividad de las empresas españolas; puesto que, aunque una gran parte de las mismas dedicaron parte de sus excedentes en un primer momento a reducir sus niveles de endeudamiento y a disminuir sus plantillas, y posteriormente realizaron procesos importantes de renovación tecnológica, aún quedaba por efectuar toda una amplia tarea de reformas en la gestión empresarial que permitiera elevar la competitividad (mejora en los procesos productivos, en el diseño y presentación de las mercancías, incrementar la diferenciación de productos, fomentar la creación de nuevas estrategias y canales de distribución comercial, especialmente en el extranjero, el desarrollo de la innovación, etc.).

En resumen, en la política económica desarrollada en los años 1975/84, *no se consideraron suficientemente las causas estructurales de la crisis*, por lo que las reformas que se hicieron fueron incompletas y se realizaron con retraso, consecuentemente el ajuste que hubo de efectuarse fue más costoso y, en segundo lugar, al no realizar la mayor parte de las reformas necesarias, se perdió la ocasión de llevar a cabo los cambios que hubieran permitido que la economía española estuviera en buenas condiciones para enfrentarse al reto de nuestra integración en la CE a partir de 1986.

Una vez superada la fase de crisis, entre los años 1985 al 1990, nuestra economía observó una época claramente expansiva con fuertes índices de crecimiento de la inversión (10,5% anual promedio), y del empleo (2,5%), creándose 1.700.000 nuevos puestos de trabajo, (en su inmensa mayoría contrataciones temporales), ambos fenómenos impulsaron una alta tasa de crecimiento del PIB, el 3,8% anual promedio.

Las causas de tan elevadas tasas de crecimiento pueden atribuirse en primer lugar al significativo aumento de los excedentes empresariales a partir de 1984 (como consecuencia de la moderación de los salarios reales y los altos crecimientos de la productividad obtenidos mediante la reducción de las plantillas, los intensos procesos de innovación tecnológica y la mejora en los métodos de gestión), en segundo lugar, a la expansiva coyuntura internacional, que incidió en la economía española (no hemos de olvidar que la inversión extranjera alcanzó a representar el 17% del PIB en este período, mientras que la inversión directa extranjera superó el 30% del total invertido en algunos sectores industriales), en tercer término, la moderación de los precios del petróleo, y en cuarto lugar al tirón que sobre la demanda interna realizó el creciente déficit público.

En este período, nuestros equilibrios macroeconómicos internos mejoraron en los ámbitos de estabilidad de precios (el crecimiento del IPC se redujo del 8,2% en 1985 al 5,5% en 1990) y del nivel de paro (la tasa pasó de ser el 20,8% en 1985 al 15,7% en 1986), también en el área de las finanzas públicas se mejoró, ya que nuestro déficit público a pesar de ser elevado se redujo, pasando del -6,9% del PIB en 1985 al -4% en 1990.

Sin embargo, en el ámbito exterior las cifras no fueron positivas como consecuencia de tres procesos: la progresiva integración de la economía española en la CE que puso en evidencia las dificultades de nuestras empresas ante la competencia exterior, el fuerte impulso de las importaciones provocado por el crecimiento del consumo y de la inversión empresarial que adquirió equipos y tecnología en el exterior, y la falta de ahorro interno para atender las necesidades del proceso inversor en las empresas y el alto volumen de déficit público.

En definitiva, como fruto de los procesos anteriores, el déficit exterior alcanzó volúmenes considerables, así el déficit comercial de representar el 2,7% del PIB en 1986 pasó al 6% en 1990; en términos de cuenta corriente el superávit exterior del 1,6% del PIB en 1986 se transformó en un déficit del -3,7% en 1990. Aunque nuestra balanza básica observó sucesivos saldos positivos y nuestros niveles de reservas alcanzaron crecimientos espectaculares (de 16.000 millones de dólares en 1986, pasamos a 53.100 millones en 1990)

como consecuencia de la gran entrada de capitales exteriores; los elevados déficits comerciales y de cuenta corriente expresaban un desequilibrio significativo y mostraban uno de los problemas básicos de nuestra economía, la falta de competitividad exterior.

Durante el período de crecimiento 1985-90, la política económica practicada por el Gobierno socialista continuó en líneas generales la estrategia diseñada en anteriores épocas, es decir, la preeminencia de la política monetaria como medio de control de la inflación y del mantenimiento del tipo de cambio de la peseta, unida a la política de flexibilización del mercado de trabajo (con la aprobación de la normativa legal de 1984, que abrió paso al desarrollo acelerado de la contratación temporal en España) y de moderación salarial. Con estas medidas de política económica se pretendía generar altas tasas de beneficios que propiciaran a su vez la inversión y la creación de empleo, fruto de dichas políticas laborales los salarios crecieron en términos reales un 0,9% anual promedio y la productividad el 1,8% por lo que la variación de los costes laborales unitarios promedios en términos reales fue negativa, -0,9%.

La política fiscal continuó creciendo tanto en sus niveles de recaudación (como resultado de crecimiento económico, la disminución de las bolsas de fraude y la adaptación de la fiscalidad española a la comunitaria) como en sus niveles de gasto, sin embargo, y a pesar de que en términos europeos los índices del gasto (43,4% del PIB en 1990) y de los ingresos públicos (39,4%) resultaban aún algo inferiores respecto a la media comunitaria, el persistente déficit público (4% del PIB) provocaba presiones al alza de los tipos de interés y de los precios y contribuía a impulsar el crecimiento del déficit externo, por lo que exigía actuaciones para su resolución. Sin embargo, *tampoco en esta época se realizaron todas las reformas estructurales* que nuestra economía necesitaba desde los años setenta y a las que anteriormente he hecho mención, si exceptuamos las reformas del mercado laboral y el inicio del proceso liberalizador del sector financiero. Se desaprovechaba de esta manera la buena ocasión que brindaba la coyuntura expansiva, que hubiera permitido efectuar las reformas con menores costos económicos y sociales, se había optado por el “predominio de la política monetaria”.

## EL PROGRAMA DE CONVERGENCIA DEL GOBIERNO SOCIALISTA.

Cuando en diciembre de 1991 se acuerda el TUE, la economía española había entrado ya en una fase de estancamiento con bajo nivel de crecimiento del PIB (2,5%), de la inversión de capital fijo (1,6%), y del empleo (0,3%); el nivel de inflación continuaba descendiendo (5,5%) al igual que la tasa de paro (15,8% de la población activa), sin

embargo nuestro déficit comercial exterior continuaba situado en un alto nivel (el 6,3% del PIB) al igual que el déficit por cuenta corriente (3% del PIB).

En términos comunitarios, nuestro país, con una renta per capita que alcanzaba el 79% de la media comunitaria, se incluía en el conjunto de países menos desarrollados de la CE. En el ámbito macroeconómico, a pesar de haber reducido sus desequilibrios, nuestros diferenciales respecto a los de la CE eran significativos, así nuestra tasa de paro 15,8% era superior al 8,8% de promedio comunitario, el desequilibrio exterior español -3% medido a través del déficit por cuenta corriente era mayor que el -0,4% de la CE, mientras que nuestro nivel de inflación 5,5% superaba al 4,7% de la Comunidad. También en el campo de las finanzas públicas los índices españoles de desequilibrio superaban a los comunitarios, puesto que nuestro déficit público -4,4% del PIB era superior al -4,3% de la CE, asimismo nuestras tasas de interés a largo plazo 12,4% superaban el 10,4% comunitario, únicamente el peso relativo de la Deuda pública en España 45,6% del PIB se hallaba por debajo del promedio de la CE el 60,6%.

En esta coyuntura, el Gobierno presentaba el Plan de Convergencia que pretendía ofrecer una estrategia de política económica cuyo objetivo principal era conseguir un buen ritmo de crecimiento dentro de un *contexto estable* que permitiera el cumplimiento de las condiciones de convergencia establecidas en el TUE.

El Plan preveía un crecimiento del PIB en un 3,5% para el período 1992/96 (cifra superior a la media comunitaria del 2,5%), conseguido mediante un crecimiento de la inversión de capital fijo del 5,1% y un aumento del empleo del 1,22%, (lo que significaba crear un millón de nuevos puestos de trabajo).

De igual modo, el programa también pretendía reducir los desequilibrios internos, se preveía disminuir las tasas de paro y el déficit exterior por cuenta corriente hasta que alcanzaran en 1996 los índices del 13,5% y del -2,3% del PIB respectivamente, en el ámbito de la inflación se pretendía reducirla hasta el 3%, el déficit público también se vería aminorado hasta convertirse en el 1% del PIB en 1996. Consecuentemente, en sintonía con los fenómenos anteriores, también se verían reducidos nuestros tipos de interés a largo plazo. En definitiva, el Plan preveía la reducción simultánea de nuestros diferenciales de inflación y tasas de interés respecto a las comunitarias y por otra parte conseguía que el déficit público y la deuda pública se situaran por debajo de las exigencias previstas en el TUE, con lo que en el año 1996 estaríamos en condiciones de entrar en la tercera fase de la UEM.

Para conseguir los objetivos anteriores el Gobierno establecía una serie de medidas de políticas económicas instrumentales, que en términos generales no variaban excesivamente respecto a las practicadas hasta el presente, y añadía a las mismas una serie muy limitada de medidas de reforma estructural:

Política monetaria: El objetivo principal de la política monetaria según el PC sería asegurar el mantenimiento de la estabilidad del tipo de cambio de la peseta integrada en el SME, a cuya banda estrecha se incorporaría antes de 1994.



En segundo lugar el Gobierno presentaría al Parlamento durante el año 1992 un proyecto de ley, por el que se otorgaría al Banco de España autonomía para la formalización y ejecución de la política monetaria<sup>1</sup>.

Política fiscal y presupuestaria: El Gobierno pretendía reducir el déficit público, para cumplir una de las condiciones de Maastricht, y a su vez, evitar las presiones que el desequilibrio de las finanzas públicas generaba sobre los niveles de inflación, los tipos de interés y el déficit exterior.

La reducción del déficit público se pretendía alcanzar mediante aumentos de recaudación conseguidos a través de un mayor crecimiento económico, mejoras de la gestión tributaria y en la lucha contra el fraude, y a través del control del Gasto Público, ya que la presión fiscal individual se pretendía mantener constante en el nivel alcanzado en 1993.

El Plan estimaba que los impuestos directos pasaran de representar el 10% del PIB en 1991 al 11,9% en 1996, los indirectos del 7,9% al 8,5% y las cotizaciones sociales del 11,4% al 12,3% del PIB, los ingresos financieros permanecerían situados en el 3,5% del PIB. En conjunto, los ingresos del Estado pasarían de ser el 32,9% del PIB en 1991 hasta alcanzar el 36,2% en 1996.

En el apartado de los gastos públicos, se preveía la estabilización del gasto de las administraciones centrales (en el 37% del PIB) y territoriales.

Política laboral: las medidas a instrumentar en este apartado resultaban las más detalladas. De hecho se continuaba realizando el tipo de actuaciones de etapas anteriores: políticas de moderación salarial (con aumentos de los salarios reales menores que los crecimientos de productividad) con la intención de mantener las tasas de ganancias empresariales, al mismo tiempo que se proseguía en la profundización de la ya alta flexibilización del mercado de trabajo, con el objeto de eliminar barreras a la movilidad geográfica y funcional (propugnando la eliminación de las ordenanzas laborales).

Por otra parte se pretendía elevar el interés por la búsqueda de empleo a través de la reducción de las prestaciones económicas a los desempleados y la vinculación de las prestaciones por desempleo a la realización de cursos de formación, se propugnaba la reforma del INEM y la creación de un Fondo Social para impulsar la formación profesional, junto a la creación de 60.000 nuevas plazas en cursos de capacitación para los trabajadores desempleados.

Finalmente, siguiendo las recomendaciones del Comité de expertos, se elevaban de seis meses a un año el período mínimo de contratación temporal.

Políticas estructurales: El Gobierno proyectaba realizar medidas de desregularización económica en el sector servicios. Entre ellas diversas actuaciones encaminadas a liberalizar las telecomunicaciones y la transparencia en el sector crediticio.

El Gobierno también se comprometía a no aumentar el tamaño del sector público empresarial y a no incrementar la canalización de recursos públicos a las Empresas Públicas.

Se promovían mejoras en la gestión de la sanidad pública y en el ámbito de la vivienda se impulsaba el crecimiento de los precios, a través del aumento de la oferta de suelo urbanizable, el impulso de la canalización del ahorro haría el mercado inmobiliario y la redacción de una nueva ley de arrendamientos urbanos.

## ANÁLISIS SOBRE LAS LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE CONVERGENCIA.

De la lectura del Programa de Convergencia y de su confrontación con los problemas de la economía española, se desprende que el documento analizado pretende un *objetivo prioritario: el cumplimiento de las "condiciones de convergencia"* establecidas en el TUE. En cambio el Plan de Convergencia *no es un programa completo e interrelacionado de medidas concretas* a aplicar mediante las diversas políticas instrumentales y sectoriales durante el próximo quinquenio, programa que resultaba necesario si tenemos en cuenta la problemática situación en la que se hallan diversos sectores de nuestra economía enfrentados a una difícil coyuntura de profundización en el proceso de integración europea y de creciente estancamiento económico.

En las páginas del Programa de Convergencia, no se analizan en profundidad los cinco objetivos clásicos de la política económica (crecimiento, pleno empleo, estabilidad de precios, distribución de la renta y equilibrio exterior); puesto que los análisis que se efectúan sobre las causas y soluciones para reducir los problemas de la inflación y el paro, y conseguir incrementar el crecimiento, resultan excesivamente genéricos y en consecuencia las medidas de política económica que se propugnan son a nuestro entender soluciones parciales y excesivamente inconcretas. Por otra parte el desequilibrio exterior tan significativo en la presente coyuntura se trata únicamente de manera secundaria e insuficiente y en cuanto al tema de distribución de la renta simplemente no se menciona.

En el ámbito de las políticas económicas instrumentales (monetaria, fiscal y presupuestaria, laboral y económica exterior) el documento solamente se refiere a determinados tipos de medidas, sin utilizar el amplio abanico de instrumentos de política económica disponible.

Será sin embargo en el campo de las políticas sectoriales donde el Programa de Convergencia muestre mayores carencias, puesto que del largo listado de políticas posibles (industrial, construcción y vivienda, turística, servicios financieros, infraestructuras, servicios públicos y reforma de la administración pública, transporte e infraestructuras, reforma de las estructuras comerciales interiores y exteriores, formación de la mano de obra y del empresariado, innovación tecnológica y política de mejora de la gestión empresarial, etc.), el documento únicamente se refiere de forma específica a la formación profesional, la

gestión sanitaria, las telecomunicaciones, la vivienda y las inversiones en infraestructuras. El balance en este ámbito no puede ser positivo, puesto que se dejan sin tratamiento sectores económicos con amplia repercusión en la vida económica del país.

Sin embargo, la economía española necesitaba un *programa completo* a medio plazo que abarcara todos los objetivos macroeconómicos y que actuase, a través de un *conjunto coordinado de medidas detalladas* de políticas económicas instrumentales, sectoriales y estructurales, medidas vinculantes para la administración, y que estuvieran *periodificadas en el tiempo*.

En segundo lugar, debemos observar que el proyecto presentado pretende conseguir en el quinquenio 1992/96 un conjunto ambicioso de objetivos, crecimiento de PIB del 3,5% y aumento del empleo en 1 millón de ocupados.

Las previsiones del Gobierno resultan a nuestro parecer *excesivamente optimistas*, puesto que prevé un crecimiento del PIB para 1992/96 similar al de la época de expansión 1985/90, mientras que en la actualidad nos hallamos en una fase cíclica recesiva. Por otra parte, el objetivo de crecimiento interno resulta aún más difícil de conseguir si simultáneamente se pretende la reducción de la inflación y el desequilibrio exterior, lo que implica la necesaria disminución de los déficits públicos.

Ciertamente, las cifras de 1992 ya evidencian el citado *optimismo* del proyecto, pues observan desviaciones significativas respecto a las previstas en el Programa de Convergencia. Es de temer que un planteamiento optimista obligue a sucesivas revisiones de las cifras y de las medidas previstas, lo que sin duda *afectará a la credibilidad* del proyecto.

En tercer lugar, dada la significación política y económica del Plan, debería haberse ofrecido *mayor información* sobre el mismo y a su vez debería haber sido objeto de diálogo y, en la medida de lo posible, *consensuado* entre los interlocutores sociales y políticos, lo que hubiera facilitado su viabilidad política. En cualquier caso las primeras medidas realizadas del Plan de Convergencia que afectaron al mercado de trabajo de forma directa, así como las formas políticas utilizadas en su adopción, no parecen las más convenientes si se pretendía evitar la conflictividad social.

En resumen, en un primer nivel de análisis, el Programa de Convergencia aparece como un proyecto con actuaciones excesivamente genéricas, inconcreto, con un horizonte demasiado optimista y sin analizar de forma explícita la conexión existente entre las diversas medidas. Supongo que las características anteriormente descritas no responden a una falta de análisis y de estrategias de política económica por parte del Gobierno, puesto que los análisis y las estrategias seguramente habrán sido diseñados de forma previa a la redacción del Plan, sino más bien, parece que la parquedad y simplicidad del Plan de Convergencia se ha debido a los condicionamientos propios de una coyuntura preelectoral en la que se pretendía evitar ofrecer información, datos y cuestiones específicas, que hubieran podido impulsar el debate y la confrontación. Sin embargo, en mi opinión, la economía y los ciudadanos hubieran agradecido un Plan más completo y con mayor grado de concreción.

En un segundo nivel de análisis trataré de estudiar los diagnósticos que sobre los diferentes objetivos macroeconómicos (estabilidad de precios, empleo, equilibrio exterior, crecimiento y distribución de la renta) realiza el Plan de Convergencia y sobre las medidas de política económica que propugna.

## LOS PRECIOS, LA INFLACIÓN.

El Plan de Convergencia propone como objetivo la reducción del nivel de inflación del 5,5% de 1991 hasta alcanzar el 3% en 1996.

De los cuatro posibles orígenes que habitualmente se presentan como causas generadoras de los aumentos de los precios (abundancia monetaria, excesiva demanda agregada, crecimientos de los costes y estructuras inflacionarias) el análisis del Plan únicamente hace referencias parciales a algunos de ellos, mencionando la presión inflacionaria del déficit público y del crecimiento de los costes laborales, y finalmente nos habla de la necesidad de realizar medidas de liberalización de los precios administrados y de los servicios profesionales.

Si a continuación analizáramos sucesivamente cada uno de los posibles orígenes de la inflación en España, observaríamos en primer lugar como en el ámbito monetario el crecimiento de los "activos líquidos en manos del público" en los últimos años, se ha realizado moderadamente, de acuerdo con los objetivos previstos, por lo que no podemos hablar de *excesos monetarios* (en todo caso pudo existir cierto origen monetario de la inflación en los años 1985-88, en los que no se cumplieron los objetivos previstos).

Desde el punto de vista de la demanda agregada desde 1986 hasta 1989, asistimos a un fuerte crecimiento (especialmente en el ámbito inversor) que superó ampliamente los ritmos de aumento del PIB, generando posiblemente impulsos inflacionarios, especialmente en el sector servicios.

Sin embargo, a partir del segundo semestre de 1989, las medidas de política económica restrictiva adoptadas, redujeron considerablemente la expansión de la demanda, por lo que desde 1990 los moderados ritmos de aumento del consumo y la inversión, no permiten hallar un origen inflacionario en los excesos de demanda.

En el ámbito de los costes, hemos de constatar la moderación de los precios petrolíferos (si exceptuamos algún corto período de tiempo). Y, con respecto a los costes laborales, entre 1985 y 1990 los salarios crecieron en términos reales, pero lo hicieron moderadamente, con incrementos inferiores a los aumentos de productividad, (consecuentemente las variaciones de los costes laborales unitarios en términos reales fueron negativas, con la excepción de 1987), por consiguiente, en términos agregados, no se observa una presión inflacionaria de los salarios. Únicamente en los años 1991 y 1992, se altera la tendencia anterior mediante

unos aumentos salariales que en términos reales fueron superiores a los incrementos de la productividad, este proceso pudo provocar presiones alcistas en los precios, especialmente en aquellas ramas, como los servicios, que están escasamente sometidas a la competencia exterior.

Un crecimiento moderado de los salarios reales, (con tasas anuales inferiores a los aumentos de productividad), sería conveniente para evitar tensiones inflacionistas, y a su vez, creo que políticamente viable, siempre que las empresas ofrecieran una utilización productiva de sus excedentes mediante la reinversión de los mismos en innovación tecnológica y comercial, y a su vez permitieran consolidar una progresiva reducción de la jornada que posibilitara nuevas contrataciones, y por otra parte se fueran introduciendo mejoras en la participación de los trabajadores en las empresas.

En definitiva, con la excepción de los dos últimos ejercicios, no podemos hallar un origen inflacionario en los costes laborales de las empresas.

En opinión de diversos estudios, la principal causa de nuestra inflación actual, (en torno a unos 3 puntos de los 5,4 del presente ejercicio), posiblemente tenga un origen *estructural*, es decir, el proceso inflacionario se genera por determinadas prácticas o hábitos que producen fuertes demandas en ciertos sectores, mercados en los que la competencia es escasa por hallarse regulados administrativamente o en los que *de facto* existen barreras de entrada a los mismos, o bien hay instituciones que limitan la competencia, o existen actividades especulativas, etc.

Ciertamente, el origen estructural de gran parte de la inflación española, puede observarse, si tenemos en cuenta que nuestra economía presenta desde hace cuatro ejercicios una inflación dual, puesto que mientras en el período de 1980-87 los precios industriales y de los servicios observaron comportamientos similares, desde 1988 los precios industriales han moderado mucho su crecimiento, y en cambio los servicios han mantenido altas tasas de incremento en sus índices de precios.

Una primera explicación a este hecho diferencial puede hallarse en que, aunque los salarios crecieron en ambos sectores de manera parecida, la productividad que obtuvo la industria fue el doble de la observada por los servicios, en esta diferencia pudiera hallarse una posible causa del distinto comportamiento inflacionario de los dos sectores. Ciertamente entre 1970 y 1991 los salarios de la industria en términos reales crecieron anualmente al 2,8%, mientras que en los servicios lo hacían al 2,3%. Por otra parte, la productividad industrial creció el 3,7% y la del sector terciario el 1,8%

Existe sin embargo, una segunda causa más significativa. Como consecuencia de la apertura externa de la economía española, los precios finales de los bienes industriales se hallan sometidos desde hace un tiempo a la competencia exterior, mientras que los servicios han podido permanecer en gran parte protegidos frente a la competencia exterior, consecuentemente el sector terciario ha podido presionar sus precios al alza, como procedimiento de obtención de márgenes adicionales de beneficios sin correr riesgos de pérdida de cuota de mercado.

Efectivamente, el sector servicios detenta unas características que limitan considerablemente el nivel de competencia, como disposiciones administrativas o colegiales, mercados muy fragmentados con limitada actividad competitiva (hostelería, turismo, servicios de reparaciones de vehículos, etc.) servicios públicos o financieros con fuerte poder oligopolístico, etc.

El fenómeno inflacionario en este sector se halla también vinculado a los cambios que se han producido en determinados hábitos de los consumidores (incremento del uso del automóvil, comidas fuera de casa, utilización de la sanidad privada, etc.). Estas nuevas costumbres, han generado aumentos en la demanda del este sector posibilitando incrementos excesivos en sus precios. A los hechos anteriores habría que añadir los amplios movimientos especulativos que se produjeron en el campo inmobiliario en España en el último quinquenio.

Del análisis anterior se desprende que, aunque las medidas que propugna el Gobierno sobre el control de la demanda, la disminución del déficit público a un nivel aceptable (considerando la fase recesiva en que nos hallamos) y la moderación salarial (con un nivel de crecimiento de los costes salariales ligeramente superior o igual al de los precios), puedan parecer adecuadas; en el momento presente la reducción de nuestro proceso inflacionario exige preferentemente la reforma de diversas estructuras económicas y sociales de carácter inflacionario, y es en este sentido en el que los planteamientos del Plan de Convergencia parecen insuficientes, puesto que únicamente abordan algunos de estos aspectos.

Considero que las actuaciones deberían ser más amplias, fomentando la competencia de los mercados en el sector terciario y reduciendo las disposiciones administrativas que la dificultan, disminuyendo la capacidad de imponer precios por parte de algunas instituciones, hacer frente a la especulación con medidas económicas y legales (especialmente en un campo tan primordial como el de la vivienda), e impulsar la productividad del sector servicios, mediante la innovación tecnológica y la mejora en la formación de la mano de obra.

Entre otras medidas concretas se podrían sugerir: la liberalización del mercado financiero y bancario, que permita reducir los costes de intermediación y disminuir las tasas de interés, el aumento de la competencia en los transportes y las telecomunicaciones, el fomento de la competencia y la moderación de los precios en el sector de la hostelería y el turismo, planes de reestructuración comercial, reforma de la legislación sobre Colegios Profesionales, mecanismos de supervisión y fomento de la competencia en talleres de reparación y servicios profesionales.

En el bien entendido de que la principal causa inflacionaria se halla en el momento presente en los aspectos estructurales, han de ser éstos los que deberían reformarse, para evitar de esta manera soluciones monetarias restrictivas que producirían *costes excesivos* en los ámbitos del crecimiento y el empleo sin eliminar las causas inflacionarias de origen estructural.

## EL EMPLEO, EL PARO Y LOS SALARIOS.

El mercado de trabajo en España, como vimos anteriormente, experimentó en el sexenio 1985-90 un fuerte desarrollo que ha permitido crear 1.200.000 puestos de trabajo, (especialmente, mediante la contratación temporal, la reglamentación de las relaciones laborales y la precarización del empleo), elevando las tasas de ocupación y actividad (en particular las femeninas) y reduciendo las tasa de paro; sin embargo, en los dos últimos ejercicios hemos asistido a un cambio de tendencia, con reducciones del empleo y un nuevo crecimiento en los índices de paro. No obstante, las proyecciones del Plan de Convergencia son más optimistas que las realizaciones del 91 y del 92, ya que preveían la creación de un millón de puestos de trabajo para el quinquenio 1992-96.

Las causas del desempleo resultan generalmente complejas de determinar, puesto que el mercado de trabajo es un ámbito particular en el que inciden diversas variables de índole económico, social y político. Convencionalmente se describen como posibles causas generadoras del desempleo los excesivos costes laborales o las rigideces del mercado de trabajo, que sitúan los salarios por encima del nivel que libremente determinarían la oferta y la demanda (paro neoclásico); el desempleo por insuficiencia de demanda (paro keynesiano), y finalmente, a las anteriores, podemos añadir un conjunto de causas que provocan disfunciones en el mercado de trabajo y que agruparemos bajo el nombre de "desempleo por causas estructurales", como el paro estacional provocado por las actividades de temporada, el desempleo producido por la introducción de nuevas tecnologías ahorradoras de mano de obra, el paro existente por inadecuación de las calificaciones de los trabajadores a las nuevas demandas del mercado de trabajo, la desocupación generada en el sector industrial o turístico por mantener unas estructuras empresariales insuficientes para hacer frente a las nuevas características de la demanda o a la competencia exterior, la segmentación creciente de los mercados laborales que dificulta las posibilidades de encontrar trabajo, etc.

Los análisis tradicionalmente realizados por el Gobierno han hecho mención a la necesidad de moderación de los costes laborales y a aumentar la flexibilización del mercado de trabajo, como forma más eficaz de generar beneficios empresariales y aumentar a medio plazo la inversión y el empleo y a su vez facilitar la movilidad de los trabajadores.

Las argumentaciones efectuadas en el Plan de Convergencia, continúan enmarcadas en la línea interpretativa anterior, augurando un marco futuro en el que los salarios crecerán un punto por encima del Índice de Precios al Consumo, IPC, con lo que los Costes Laborales Unitarios serían negativos en términos reales). De igual modo, el documento del Gobierno propone incrementar la movilidad funcional y geográfica de los trabajadores y la reducción de las prestaciones a los parados junto a medidas que faciliten los despidos.

El conjunto de actuaciones anteriores pretende facilitar el traslado de los trabajadores a donde exista demanda y al mismo tiempo incentivar a los parados a buscar nuevas ocupaciones, y en conjunto reducir el nivel de exigencia laboral de los trabajadores,

pretendiendo conseguir de esta manera que los desocupados presionen a la baja los salarios de los empleados con mayor eficacia que hasta el presente, ya que con costes laborales más reducidos se conseguirá incentivar a los empresarios en la creación de nuevos empleos.

Los análisis anteriores parten de constatar en la economía española la persistencia de altos niveles de inflación y de salarios, junto a índices de desempleo también elevados (en términos económicos se afirma que se ha elevado "la tasa de paro de equilibrio a largo plazo"), de lo que debería deducirse en principio, que existe una escasa incidencia del nivel de paro sobre los salarios. Las causas de este fenómeno, a juicio de determinados analistas, se hallan en la excesiva presión salarial y en la alta protección al desempleo, de manera que la moderación de ambos factores, estima el Gobierno, contribuiría a crear empleo y a reducir el paro existente, por lo cual se decide a emprender las medidas anteriormente indicadas.

Sin embargo, a juicio de otras líneas interpretativas, los análisis anteriores resultan insuficientes, puesto que la existencia del paro persistente en nuestra economía no se debe tanto a los excesos salariales (que por otra parte las cifras agregadas no detectan entre 1985 y 1990, período en el que los salarios reales crecieron menos que la productividad), sino que encuentran sus orígenes en diversas causas estructurales, que deberían reformarse si se pretende solucionar el problema del desempleo.

En primer lugar hemos de hacer referencia al importante volumen de población excedente que sale del campo anualmente, así como al paro estacional que se provoca, en determinadas épocas del año, con el cese de las actividades relacionadas con el turismo y la agricultura.

En segundo término, en nuestro país, todavía actualmente, existe una baja tasa de actividad femenina, por lo que la incorporación de la mujer al mercado laboral presiona al alza los índices de desocupación.

En tercer lugar, hemos de considerar que la incorporación a la CE ha producido y provocará en el futuro cambios sectoriales, en un movimiento al alza y en otros casos a la baja entre las diversas ramas de la economía (que ha exigido y demandará trasvases intersectoriales de mano de obra). Al mismo tiempo, las empresas han cambiado sus métodos de producción introduciendo nuevas tecnologías que demandan nuevas cualificaciones a sus trabajadores. Los dos procesos anteriores han provocado aumentos en el número de desocupados, su reducción exige mejorar la información sobre la demanda de trabajo, facilitar la movilidad de los trabajadores, pero especialmente será necesario realizar mejoras en el proceso formativo de la mano de obra. En definitiva, resulta necesario realizar un plan amplio de formación profesional y de reciclaje de los trabajadores, mediante acuerdos entre empresas, administración y sindicatos, y a su vez, realizar una profunda reforma del Instituto Nacional de Empleo, INEM, que mejore las posibilidades de información entre los demandantes y oferentes de trabajo (reforma que debería haberse iniciado con anterioridad y sobre la que ya existen desde hace años planes concretos que no se han llevado a efecto).



En cuarto lugar, el problema del desempleo va unido a las dificultades que han observado muchas de nuestras empresas al tener que hacer frente a la competencia exterior tras nuestra integración en la CE. Como mencionábamos anteriormente, una parte significativa de nuestras empresas ha observado tradicionalmente dimensiones excesivamente reducidas, ha tenido insuficiente capacidad de autofinanciación y de innovación tecnológica y no siempre ha desarrollado métodos de gestión eficaces. Por otra parte, y en relación con los procesos de comercialización, la diferenciación y la presentación de los productos no siempre fueron los adecuados para satisfacer las exigencias de los consumidores españoles y europeos. Todas estas cuestiones provocaron que un porcentaje apreciable de nuestras empresas experimentaran serias dificultades al encontrarse ante un entorno más competitivo, frente a entidades con mayores dimensiones y capacidad tecnológica y financiera, más acostumbradas a la actuación en mercados exteriores. Aunque parte de nuestras empresas realizaron esfuerzos de modernización y capitalización en la segunda mitad de los ochenta, alcanzando de esta manera mejores niveles de competitividad, la necesidad de mejora sigue en parte vigente. Ciertamente, en el tema de la reforma de la pequeña y mediana empresa pudieran haberse establecido, desde hace tiempo, planes entre la administración y los interlocutores sociales, que habrían podido colaborar en la mejora del tejido empresarial y en su preparación para la integración en Europa. Sin embargo, en gran medida, la tarea todavía sigue pendiente, de manera que convendría realizar esfuerzos mediante planes concertados, sobre la mejora de la formación empresarial, el asociacionismo para el posicionamiento y comercialización de los productos, especialmente en el exterior, crear nuevos canales de venta al exterior, mejorar la capacidad de autofinanciación mediante la realización de políticas macroeconómicas adecuadas y la liberalización del sector financiero (de manera que se consiguiesen reducir los tipos de interés), intensificar los procesos de innovación tecnológica y la diferenciación de los productos y su mejora cualitativa.

Un volumen significativo del desempleo surgió como consecuencia del proceso de crisis del sector industrial español, que enfrentado a una creciente competencia exterior por parte de los países comunitarios y de los nuevos países industrializados, al aumento en los costes a finales de los setenta y primeros de los ochenta y a la debilidad, ya mencionada, de algunas estructuras empresariales; se vió profundamente afectado en sus niveles de producción y empleo.

El problema del empleo aparece en este caso vinculado a la necesidad de orientar la reindustrialización hacia la sustitución de las actividades de demanda débil, intensivas en mano de obra (que ya se realizan en países menos avanzados que el nuestro), por otras de demanda moderada o fuerte (más acordes con el grado de desarrollo de nuestra economía) que utilicen más intensivamente mano de obra especializada y un nivel tecnológico al que seamos capaces de responder.

En la misma línea argumental anterior deberían realizarse reformas en el sector turístico que permitieran realizar una oferta de más calidad y variedad, mejor adaptada a las nuevas demandas de los consumidores y con mejor relación calidad/precio.

La realización de estos cambios en las empresas y sectores contribuirá a generar un mayor grado de competitividad y, en consecuencia, empleos más seguros a medio plazo. En mi opinión, esta línea de actuación estructural parece más fructífera que la simple moderación de los costes salariales.

De acuerdo con las anteriores argumentaciones parece necesaria la realización de acuerdos que faciliten la movilidad funcional de los trabajadores, junto a la mejora de la formación profesional, de las condiciones de trabajo y de la participación de los trabajadores en el ámbito empresarial. Todo este conjunto de medidas permitirían mejorar la calidad del trabajo y con ello lograr aumentar nuestra competitividad.

Finalmente, debemos considerar el hecho que las nuevas tecnologías reducen significativamente a medio plazo las necesidades de mano de obra, por lo que entendemos que el problema de la ocupación requerirá, entre otras cuestiones, de acuerdos pactados que introduzcan progresivamente disminuciones en la jornada laboral con cargo a los incrementos de productividad, de forma que estas medidas permitan incrementos del empleo a largo plazo, puesto que a pesar de las argumentaciones contrarias, éste ha sido el camino que históricamente se ha recorrido en el mercado laboral.

## EL DÉFICIT EXTERIOR.

Nuestro desequilibrio exterior se ha incrementado de forma intensa desde 1986 hasta la actualidad, puesto que en términos de cuenta corriente hemos pasado de un superávit del 1,7% del PIB en 1985, a un déficit del 3,3% en 1991 y 3,4% en 1992; en la aceleración experimentada por nuestro déficit comercial, que alcanzó el 6,3% del PIB en 1992, se halla la causa principal del desequilibrio de nuestras cuentas exteriores.

El Programa de Convergencia pretende reducir nuestro déficit por cuenta corriente hasta alcanzar el 2,3% del PIB en 1996, aunque de persistir las tendencias presentes en la actualidad parece difícil que se obtenga el objetivo anterior.

El proyecto del Gobierno aquí analizado interpreta el desequilibrio exterior como fruto del auge experimentado por nuestra demanda nacional (especialmente, el intenso proceso inversor de nuestras empresas, en los años 1986-90), que provocó que el ahorro nacional no fuera capaz de suministrar recursos suficientes para financiar el citado proceso inversor y a la vez satisfacer las necesidades del déficit público, por lo que la insuficiencia de recursos comportó la necesidad de atraer capitales exteriores.

A su vez, se ha mencionado reiteradamente, como obstáculo que ha dificultado las exportaciones españolas, la sobrevaloración de la peseta y el diferencial de inflación España-CE, ambos factores provocaron apreciaciones del tipo de cambio efectivo real de nuestra moneda.

A las dificultades anteriores se podrían añadir las pérdidas de incentivos fiscales y financieros a la exportación, que se produjeron como consecuencia de nuestra integración en la CE, junto a los altos costes financieros que soportaron nuestras empresas.

Si bien todos los factores mencionados anteriormente influyeron sin duda en el hecho de que tras nuestra integración en la CE se produjera un crecimiento de las importaciones por encima del aumento experimentado por nuestras exportaciones, diversos estudios realizados muestran que el origen principal del déficit comercial se halla en el débil nivel de competitividad de nuestras empresas.

Ciertamente, distintos analistas han mostrado como en el ámbito comunitario la competitividad depende en menor medida de los costes y los precios, resultando más significativas otras cuestiones como, la diferenciación de productos, la calidad y la imagen de marca, los canales comerciales y de distribución, la publicidad, la variedad y el diseño de las mercancías, variables todas ellas que deben estar presentes en las estrategias empresariales.

En nuestro país, la escasa dimensión tecnológica y financiera de las empresas, unida al hecho de que sólo un porcentaje limitado de las mismas se hallaban habituadas a exportar y conocer los mercados exteriores, dificultó la creación de canales comerciales en el exterior y la consecución de mercancías adecuadas a las exigencias de los consumidores comunitarios.

En segundo lugar, aunque en los últimos años nuestro patrón comercial se haya ido aproximando progresivamente al europeo, convendría orientar la reindustrialización hacia sectores de demanda moderada y fuerte, intensivos en mano de obra cualificada y tecnología intermedia, en los cuales podemos observar determinadas ventajas.

Si por otra parte consideramos que para mantener un buen ritmo de crecimiento necesitaremos mantener un gran volumen de importaciones, especialmente en bienes de equipo y tecnología, el hecho anterior comportará a su vez que debamos incrementar nuestras exportaciones, pues no parece conveniente la solución periódica de limitar frecuentemente nuestra demanda como medida reequilibradora de las cuentas exteriores. Por otra parte, tampoco participo del optimismo del Plan de Convergencia, que no parece preocuparse excesivamente del desequilibrio de la balanza por cuenta corriente, puesto que sus redactores parecen confiar en las aportaciones del capital exterior como fuente continua de reequilibrio de los déficits de cuenta corriente.

Las medidas de control de demanda, depreciación de la peseta, moderación de los costes, limitación del déficit público y de los diferenciales de inflación resultan necesarias, pero deberían combinarse con actuaciones de política industrial activa, de reforma del turismo, de mejora de la calidad, comercialización y presentación de nuestros productos en el exterior, si pretendemos la reducción del déficit comercial.

En las líneas anteriores hemos analizado problemas significativos de la economía española, ante la cual se abren importantes desafíos, su solución requiere de un diálogo político y social que posibilite la realización de los cambios estructurales; en el bien

entendido que convendría que no se aplazaran una vez más la reforma de las estructuras anteriormente mencionadas. En cualquier caso, debería distribuirse el coste social de las mismas y los beneficios que de ellas se derivasen, entre el conjunto de los grupos sociales, evitando que únicamente algunos soportasen el peso global de los cambios.

Marzo 1993

#### NOTAS

1. La norma citada ya fue elaborada.